

X JORNADAS DE SOCIOLOGÍA UNLP

5, 6 y 7 de diciembre de 2018

La lucha de la comunidad educativa por la infraestructura escolar. Ampliación de la obligatoriedad y la crisis del sistema. Estudio comparado de las Regiones I y III, 2011-2017

De Luca Romina, Investigadora Asistente del Conicet con lugar de trabajo en IESAC-UNQUI y miembro del CEICS. Docente de la Universidad de Buenos Aires, FFyL Historia Argentina 3 cátedra Sartelli. Email: rom.deluca@gmail.com

Mesa 42/ Sociología de la experiencia escolar. Formatos, vínculos y procesos de desigualdad en la escuela secundaria

Contacto: mesaescuelamedia@gmail.com

Resumen

La presente ponencia examina la lucha por infraestructura escolar protagonizada por la comunidad educativa (docentes, estudiantes y padres) en las Regiones I y III de la provincia de Buenos Aires. El trabajo que aquí se presenta forma parte de un estudio mayor que investiga la dinámica descentralizada del gasto educativo y la forma que asumen los conflictos sociales educativos en las provincias de Buenos Aires, CABA y Salta entre 2003 y 2015.

En este trabajo, examinamos el impacto de la ampliación de la obligatoriedad escolar en la demanda de mayor infraestructura, secciones y aulas así como el reacondicionamiento y la reconversión de escuelas producto de la ampliación de matrícula. Examinamos los reclamos por mayor presupuesto educativo para las escuelas y el crónico deterioro de los edificios escolares, problemas que movilizan a docentes, alumnos, padres, auxiliares, directivos y otros sujetos de la comunidad escolar en la región de La Plata y La Matanza. Se evalúa el impacto de la dirección sindical en la lucha por mayor presupuesto para escuelas en ambas regiones en el período 2011-2017 y las estrategias al uso de la gestión comunitaria como forma de sortear el crónico problema de la infraestructura escolar.

HASTA 20 PAGINAS

Ponencia

El período bajo estudio se encuentra signado por el aumento de la matrícula y el impacto sobre el sistema educativo de la ampliación de la obligatoriedad escolar impulsado por la Ley de Educación Nacional y el correlato en la provincia de la Ley Provincial de Educación N° 13.688 sancionada en 2007. Tal como dispuso el artículo 16° de la Ley provincial la política educativa provincial asegura la obligatoriedad desde la sala de 4 años del nivel inicial, de todo el nivel primario hasta la finalización de la escuela secundaria “proveyendo, garantizando y supervisando instancias y condiciones institucionales, pedagógicas y de promoción de derechos, que se ajusten a los requerimientos de todos los ámbitos de desarrollo de la educación”.

La expansión del sistema educativo, que a continuación reseñaremos para las regiones bajo estudio, se inscribió dentro de los coletazos de una de las mayores crisis económico-político y sociales que sufrió el país: aquella cuyo punto de referencia se ubica el 19 y 20 de diciembre de 2001, proceso que derivó en lo que se conoce como Argentinazo (Sartelli, Eduardo: 2007). En el territorio de la provincial, el correlato directo de ese proceso en materia financiera fue la declaración de la Ley de Emergencia Económica provincial (Buenos Aires) emergencia vigente desde el 2002 a nuestros días, la sanción de la Ley 12.858 (que entre otras cosas regula organizar y/o reestructurar y/o adecuar los regímenes regulatorios de servicios públicos de obras sanitarias, provisión de agua corriente y cloacas, e instrumentar nuevas modalidades de gestión a efectos de garantizar su prestación, calidad, eficiencia y la protección de los derechos de los usuarios) y la ley 13.767 (regula la Administración Financiera y el sistema de Control de la Administración General del Estado Provincial).

Como veremos, la emergencia financiera va a chocar con los procesos de ampliación de la matrícula a lo largo de toda la etapa. Resulta necesario, entonces, poder reponer algunos indicadores generales del sistema educativo en ambas regiones. Comencemos por examinar unidades educativas y matrícula.

En la Región III¹ (La Matanza) hacia 2016 contaba con un total de 1.242 unidades educativas para un total de 405.244 repartidos en 14.964. El circuito estatal registraba un total de 799 unidades educativas para albergar a 277.103 alumnos en 10.716 secciones mientras que el sector privado registraba 443 unidades educativas para atender a un total de 128.141 alumnos en 4.248 secciones. Así, en promedio, las escuelas estatales matanceras concentran un total de

¹Para ambas regiones, los datos se corresponden a: Dirección General de Cultura y Educación-Dirección Provincial de Planeamiento Dirección de Información y Estadística: *Unidades educativas, alumnos y secciones: Totales por Región Relevamiento Final 2016*, p. 8.

347 alumnos mientras que en las privadas es de 289. Al observar el grado de concentración de alumnos por sección, si bien se trata de un promedio general, en el sector estatal asciende a 26 alumnos por sección mientras que en el sector privado la cifra es de 30. Como veremos, las escuelas platenses reflejarán la misma ecuación: escuelas con más alumnos pero con menor cantidad por sección. El promedio, veremos, encubre las altas tasas de deserción que afectan mayoritariamente al sector estatal.

Por su parte, la Región I (La Plata) para 2016 contaba con 1.238 unidades educativas donde estudiaban un total de 305.102 alumnos repartidos en 11.616 secciones. De este total, el sector estatal contaba con 846 unidades educativas, con 216.931 alumnos repartidos en 8.440 secciones mientras que el sector privado registraba un total de 392 unidades educativas con 88.171 alumnos repartidos en 3.176 secciones. En promedio, la dimensión de las escuelas estatales es de 256 alumnos promedio mientras que en las privadas la cifra es de 225 alumnos por unidad educativa mientras que por sección la cifra es de 25,7 es de 28 contando con más alumnos por aula el sector privado.

Siendo esos los datos más generales del año 2016, veamos cómo impactó el aumento de la obligatoriedad en el nivel secundario y en el nivel inicial, es decir, a fin y a inicio del proceso ampliatorio. Empecemos por el secundario. En la Región I (La Plata) se registraban 219 unidades educativas con un total de 68.941 alumnos distribuidos en 2.941 secciones. En el circuito estatal, se concentraban 129 unidades educativas con un total de 42.813 alumnos en 2.011 secciones mientras que en el sector privado, sobre un total de 90 unidades educativas, contaban con 26.128 estudiantes repartidos en 930 secciones. Es decir, la concentración público/privado por escuela era de 332/290 respectivamente y por sección de 21/28. Por su parte, en la Región III el nivel secundario registraba 309 unidades educativas con un total de 128.032 alumnos repartidos en 5.045 secciones. El sector estatal concentraba un total de 185 unidades educativas con 86.497 alumnos distribuidos en 3.691 secciones mientras que el sector privado, contaba con 124 unidades educativas con un total de 41.535 alumnos repartidos en 1.354 secciones. En las escuelas matanceras la concentración de alumnos por unidad educativa por tipo de sector público privado es de 468/335 y por secciones de 23/31.

En lo que refiere al nivel inicial, La Plata cuenta con 304 establecimientos con un total de 47.203 alumnos repartidos en 1.903 secciones. El circuito estatal tiene un total de 180 unidades educativas con 29.023 alumnos en 1.183 secciones, mientras que el sector privado registra un total de 124 unidades educativas con 18.180 estudiantes en 720 secciones. Aquí la concentración público/privado es de 161/147 para los establecimientos y de 25/25 para las secciones respectivamente. Por su parte, el gran distrito de La Matanza registraba 298

unidades educativas con un total de 52.802 alumnos en 1.985 secciones. De ese total, el sector estatal contaba con 148 unidades educativas con 29.046 alumnos en 1.090 secciones mientras que el sector privado contaba con 150 establecimientos educativos, con un total de 23.756 alumnos en 895 secciones.² Tal como puede verse, las escuelas del nivel inicial contaban con una concentración público privado de 196/158 por escuela y de 27/27 respectivamente para cada autoridad.

Ahora, bien si lo que buscamos es saber cómo impactó la ampliación de la obligatoriedad escolar entre 2011 y 2016 un indicador indirecto es verlo en relación a si existe una mayor o menor concentración de alumnos por establecimiento. Para eso, debemos comparar la relación matrícula/unidades educativas al 2001. Veamos. En la Región III (069 La Matanza), en el 2011, la cantidad de unidades educativas era de 1.194 con un total de 388.319. En lo que refiere al nivel inicial, para el circuito estatal se registraban en 2011 las cifras eran de 137 y 26.010. En el nivel secundario, para 2011, se registraba 214 escuelas y una matrícula de 92.814.³ Por su parte, en la Región I el nivel inicial estatal contaba con 175 unidades educativas para 25.964 alumnos mientras que el sector privado registraba 116 para 17.835 alumnos. Por su parte, el nivel secundario estatal contaba con 168 unidades educativas para 51.503 alumnos. Al medir la concentración de alumnos por establecimiento hallamos que en ambas regiones para los dos niveles se observa un incremento en la concentración de alumnos: más escuelas reciben más alumnos tanto en la región matancera como en la de la ciudad de las diagonales.

Lateralmente señalamos en relación a este último punto que, la concentración sería mayor si no mediara una “pérdida” de alumnos producto de los elevadísimos niveles de deserción y abandono en el nivel medio. Hemos señalado cómo ese proceso habla también de las tendencias que operan sobre el sistema y hacen circular a la matrícula entre la modalidad común y la de adultos y los circuitos de terminalidad (De Luca, 2017).⁴ De no mediar esa “circulación” la concentración de alumnos por edificio escolar sería aún mayor y presionaría aún más la crisis por la infraestructura.

²Dirección General de Cultura y Educación-Dirección Provincial de Planeamiento Dirección de Información y Estadística: *Unidades educativas, alumnos y secciones: Totales por Región Relevamiento Final 2016*, p. 14 y 16.

³Dirección General de Cultura y Educación Subsecretaría de Educación Dirección Provincial de Planeamiento Dirección de Información y Estadística (2014). *Relevamiento Final. 2014*, Buenos Aires: Gobierno de la provincia y Dirección General de Cultura y Educación Subsecretaría de Educación Dirección Provincial de Planeamiento Dirección de Información y Estadística (2011). *Relevamiento Final. 2011*, Buenos Aires: Gobierno de la provincia.

⁴De Luca, Romina (2017). *Brutos y Baratos. Descentralización y privatización en la educación argentina (1955-2001)*. Edición aumentada y ampliada, Buenos Aires: Ediciones RyR.

Siendo esos los datos más generales, veamos algunas características socio-educativas de ambas regiones para luego contextualizar cómo se procesa la crisis de infraestructura escolar. La Matanza cuenta con una población total de 1.775.816 habitantes. Mientras en la provincia, la tasa de alumnos (menores de 5 años) que no asisten a las escuelas es de 4,27% en La Matanza es de 6,11 (en el Estado la cifra trepa a 9,68 tres puntos por encima de la provincial). Las tasas de repitencia y sobre-edad son similares a las provinciales. Por lo menos el 12% de la población tiene sus necesidades básicas insatisfechas (poco menos de cuatro puntos por encima del promedio provincial).⁵ Por su parte, La Plata cuenta con una población total de 855.079 habitantes. La tasa de menores de 5 años que no asisten a la escuela es de 2,36%, es decir, poco menos de la mitad que la provincial. En la escuela secundaria, la tasa de repitencia es menor a la provincial (7,95 y 9,21 respectivamente). El 8,76% de la población tiene necesidades básicas insatisfechas.⁶ Según un relevamiento del año 2013 realizado por la ONG Techo⁷, en Argentina se registran 1.834 asentamientos informales⁸ solo en Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Gran Rosario, Alto Valle de Río Negro y Neuquén, Departamento Capital de Misiones y parte de la provincia de Salta. En ellos, habitan unas 532.800 familias.⁹ La provincia de Buenos Aires concentra el 57% de los asentamientos con 1.024 y el 61,5% de las familias, con un total de 327.600 aproximadamente. En segundo lugar, se ubica la Ciudad de Buenos Aires, donde si bien el porcentaje de asentamientos es menor (3,1%), concentra el 13,7% de las familias, con un total de 73.300. Como si el dato no fuera ya de por sí voluminoso, solo en provincia de Buenos Aires, CABA y Córdoba, 224.379 familias viven en “soluciones habitacionales”, eufemismo para denominar viviendas deficitarias que fueron convertidas en viviendas “nuevas” o “mejoradas”.¹⁰

En lo que refiere a la relación entre asentamientos y educación, el estudio de TECHO registra que el 13% de los asentamientos cuentan con una escuela primaria dentro del barrio, el 59% a menos de un kilómetro, el 24% entre 1 y 3 km y el 5% entre 3 y más kilómetros. Más de la mitad de los jóvenes que asisten a la escuela dentro de los asentamientos denunció haber

⁵Dirección General de Cultura y Educación-Dirección Provincial de Planeamiento Dirección de Información y Estadística: Descifrando la Región 3, Buenos Aires. Disponible online en: <https://goo.gl/sNw2Xw>

⁶Dirección General de Cultura y Educación-Dirección Provincial de Planeamiento Dirección de Información y Estadística: Descifrando la Región 31 Buenos Aires. Disponible online en: <https://goo.gl/Rn5euc>

⁷Mayor nivel de detalle se puede encontrar en: De Luca, Romina (2017). *Brutos y Baratos. Descentralización y privatización en la educación argentina (1955-2001)*. Edición aumentada y ampliada, Buenos Aires: Ediciones RyR.

⁸La categoría asentamientos comprende villas, asentamientos y barrios populares informales.

⁹TECHO Argentina: *Relevamiento de asentamientos informales. Año 2013*, Techo, Buenos Aires, noviembre de 2013, p. 26. El informe no contempla en su medición conventillos, edificios tomados, hoteles pensión y conjuntos habitacionales irregulares construidos por el Estado.

¹⁰Ibid, p. 28.

sufrido robos en el trayecto a ella.¹¹ Por eso, la distancia de la vivienda al establecimiento suele ser interpretada como sinónimo de violencia y por ende, podría actuar como un factor de desincentivo a la escolarización. dentro del Gran Buenos Aires La Matanza es el distrito con mayor cantidad de asentamientos (89), concentrando, además, 26.670 familias. Aunque la mayor cantidad de familias viviendo en asentamientos no reside allí sino en Quilmes. En todo el Gran La Plata, se registran 162 asentamientos con 29.420 familias, de las cuales 23.525 se ubican en la misma ciudad de La Plata.¹² En general, el 55% de los asentamientos posee acceso irregular al servicio eléctrico. En La Plata la cifra asciende al 83%. En toda la provincia solo el 11% de los asentamientos cuentan con acceso a agua corriente de red pública. ¿Cuál es la relevancia de este dato? Consideramos que existe una correlación entre condiciones de vida de la población y ausencia de escolarización lo que implicaría una crisis de infraestructura escolar mayor.

En general, contamos con poca información sistemática sobre la calidad de las escuelas (características, estado del edificio, conservación, antigüedad, entre otros). Los Relevamientos Anuales realizados por el Ministerio de Educación registran indicadores generales vinculados a cantidad de edificios, duración de la jornada escolar, cantidad de alumnos y docentes y aspectos vinculados al rendimiento interno del sistema (promoción, sobre-edad, repitencia, deserción). Solo contamos con los Censos de Infraestructura realizados en 1994 y 2014 para contar con registros sobre el estado general y grado de conservación de los edificios. Veamos, en primer término, qué información nos brindan.

Como dijimos, en el año 1994, se realizó el primer Censo de la Calidad Edilicia de los edificios escolares cuyos resultados se ampliaron en 1998. El Censo partía de una consideración clara sobre la pertinencia de conocer el estado de las escuelas y su mobiliario. No se trataba solo del recurso físico básico de las actividades educativas, sino que también eran “uno de los factores que intervienen en el proceso escolar, entendido éste como la instancia fundamental del sistema en el cual se interrelacionan sus actores, se produce el servicio educativo y se gestan resultados”. Ya previamente, la UNESCO y el BID habían advertido sobre la correlación entre infraestructura escolar y rendimiento.

Durante el año 1998, se realizó en todo el territorio un Censo Nacional de Infraestructura Escolar (CENIE) y se relevó sobre las condiciones de infraestructura de los edificios.¹³

¹¹Ibid, p. 50.

¹²Ibid, p. 80.

¹³DINIECE: *Censo Nacional de Infraestructura Escolar. Los edificios escolares del país en 1998 Resultados definitivos del CENIE 98*, Buenos Aires, Ministerio de Educación, diciembre de 2004.

En toda la provincia de Buenos Aires, para 1998, se registraban un total de 11.158 edificios escolares, 8.001 estatales y 3.157 bajo gestión privada. La mayoría eran utilizados por un único establecimiento (7.504) mientras casi el 33% eran de uso compartido (3.636). El 80% disponía en su entorno (en un radio de un kilómetro a la redonda) de acceso al transporte público, situación que equivale a considerar que el 20% no logra acceder a esa vía de comunicación fundamental. En las escuelas privadas, el acceso a medios de comunicación trepa al 95%. En las escuelas estatales sobre un total de 7.359 edificios escolares, el 45% no cuenta con gas natural ni servicio de agua de red, el 62% no tiene servicio cloacal, el 60% no tiene desagüe pluvial y el 28% no tiene servicio de recolección de residuos.¹⁴ El 7% de los establecimientos estatales no cuentan con un servicio de salud o de esparcimiento en el radio de un kilómetro. El 35% se encontraba emplazado en un entorno donde existía riesgo ambiental a 500 metros a la redonda.¹⁵ La amplia mayoría no contaba con instalaciones aptas para alumnos con discapacidad (más del 70%). De los que sí contaban con algún tipo de adaptación para discapacitados motores, la amplia mayoría disponía de rampas para su acceso (77%). El 10% de los establecimientos de la provincia, con contaba con instalaciones contra incendios lo que convierte a esas escuelas en un Cromañón en potencia.

En lo que refería a la calidad de los edificios, más del 68% de las aulas comunes fueron catalogadas en el censo como “muy pequeñas” y otro 25% como “pequeñas” lo que marca la pauta de hacinamiento que regía en la provincia de Buenos Aires. El 11% fueron declaradas en estado de conservación malo y regular. Poco menos de la mitad de las escuelas cuentan con patio abierto y solo un tercio patio cubierto. Solo el 35% de las escuelas contaban con “sala de profesores”, número similar para un espacio de comedor.

El censo de Infraestructura se volvió a repetir entre 2009 y 2014. El Censo se convocó en 2008, a través de la Resolución N° 54/08 del Consejo Federal de Educación. Los datos publicados son solo una muestra¹⁶ pero daban cuenta que sobre un total de 5.584 predios escolares se registraban 8.979 edificios escolares, a razón de 1,6 establecimientos por predio. Aunque también se registraban predios no escolares (no era esa su principal actividad) donde se habían emplazado 596 edificios escolares. El 15,5% de las construcciones contaban con techos de estructura metálica y el 38% de madera; el 1,1% respondía a una construcción de tipo “pre-fabricada”. El 96% tiene paredes de ladrillos. En materia de terminaciones de las

14DINIECE: Censo Nacional op. cit, p. 32.

15Sobre el total de 3.899 establecimientos, 1591 se encontraban próximos a basurales, 391 a mataderos, 2.404 próximos a depósitos de sustancias inflamables o explosivas, 836 a fábricas contaminantes y 224 próximos a cárceles.

16Ministerio de Educación: Censo Nacional de Infraestructura Escolar. Jurisdicción Buenos Aires, 30 de marzo de 2017. Informes disponibles en: <http://cenie.educ.ar/>

paredes, el 27% tenía revoque a la cal, el 10% ladrillo, el 1% chapa. El 40% de las escuelas no disponen de desagüe cloacal, un 25% de las escuelas no disponen de provisión de agua a través de servicio de red y casi el 20% no recibe gas de red, un 5% no dispone de servicio de recolección de residuos, casi un 5% no dispone de servicio de alumbrado público, un 34% no dispone de desagüe pluvial. Además, el 52% no dispone de salidas de emergencia, apenas el 28% tiene luz de emergencia y un plano de evacuación, un 32% cuenta con algún sistema de señalización. Casi la mitad cuenta con alarmas antirrobo. En lo que refiere a vulnerabilidad y contaminación, el 15% se encuentra próximo a basurales o zonas de rellenos, el 5% a mataderos, más del 18% a depósitos de sustancias inflamables, casi el 22% está cercano a algún foco contaminante, el 15% a un fundido de alta tensión o de una autopista o camino altamente transitado, el 32% está en zona inundable, el 21% con napas contaminadas. Poco más de la mitad (52%) cuenta con un patio exterior.

Tal como puede verse, no se registra una mejora de los edificios en todo el período bajo referencia. Al contrario, se evidencia un uso más intensivo de los establecimientos (aumenta la cantidad de unidades escolares y la concentración) tal como vimos en párrafos anteriores.

Ampliación de la obligatoriedad y lucha por infraestructura escolar

En este apartado, vamos a reconstruir los principales conflictos por infraestructura escolar que se sucedieron en el período 2011-2015 en cada una de las regiones bajo estudio.

a) La Matanza

Año 2011

El año 2011 arrancó con, por lo menos, una escuela tomada en la Región. Padres de la comunidad educativa, a fines de febrero de 2011, habían decidido tomar el anexo de la ESB nº 49 reclamando por un edificio nuevo, aulas y la independencia de la sede de la ESB 49 cuya escuela se encontraba junto a la Escuela Media Nº 50, a más de diez cuadras del Anexo de la 49. El conflicto databa de 2010, cuando la Jefa Distrital -Claudia Rodríguez- había prometido a los padres la licitación de un nuevo edificio, en quince días. Iniciado el nuevo ciclo escolar, la situación era la misma. La Escuela Media Nº 50, registraba toda una trayectoria de lucha previa iniciada desde por lo menos el 2006. Al calor de la reforma y la ampliación de la obligatoriedad escolar, el viejo edificio de la Escuela 50 había recibido el ex tercer ciclo de la ESB 49, dado lo pequeño del edificio la comunidad escolar bregaba porque la escuela estuviera en un barrio nuevo con edificio propio. La Escuela 50 había recibido un predio para

utilizar como polideportivo que fue reasignado para la ubicación de otra escuela: la primaria 126. La Media 50 contaba con reclamos iniciados ante las autoridades, por lo menos, del año 2001.

Además, la Escuela secundaria básica ESB N° 135 de Virrey del Pino reclamaba por un edificio nuevo ya que el espacio para albergar una matrícula en expansión resultaba insuficiente. En el mismo predio, con otro edificio funcionaba la Escuela Primaria N° 145.

A ese cuadro se sumaba la escuela secundaria básica ESB N° 128, en Virrey del Pino, que fue radicada en el edificio original de otra escuela (la primaria 130 del antiguo Plan Sarmiento en el Barrio de Oro Verde). La escuela, que no contaba con espacio suficiente (espacios de administración y preceptoría, junto a los archivos de las escuelas funcionaban en los pasillos), demandaba porque se le entregara parte del predio de recreación contiguo lo que la hacía entrar en confrontación con los vecinos del mismo barrio que no enviaban a sus hijos a esa escuela. Las autoridades recién prometían una construcción para el año 2013 lo que llevó a la escuela a movilizarse junto a otras en el Distrito al inicio del ciclo escolar.

La Escuela Secundaria Básica N° 37 se encontraba en estado crítico y era fiel reflejo de cómo funcionaban las escuelas en el Barrio Esperanza. Una parte, del secundario estaba radicado en la Primaria 103. En todo el barrio, las escuelas secundarias funcionan tomando parte de las cuatro escuelas primarias. Y el caso de la 37 registraba secciones de cuarto año con más de 30 alumnos. Como si eso fuera poco, la escuela contaba con tres (3) aulas de chapas de veinte años de antigüedad y tampoco contaba con baños en condiciones, resueltos de material precario. Por esos motivos, la escuela también inició un proceso de demanda de edificio propio.

En el mes de abril, la lista minoritaria del sindicato (Multicolor), junto al zonal de escuelas, se reunió con las autoridades de la DGCyE, en la ciudad de La Plata. Previamente, se habían reunido con el Consejo Escolar de San Justo. En diversas reuniones con las autoridades, recogiendo los datos de un censo de infraestructura propio realizado en forma mancomunada con la comunidad escolar, se entregó un informe con la solicitud de mejoras edilicias para, por lo menos, 39 escuelas. Se reclamó por nuevos edificios y secciones. Las reuniones con las autoridades realizaron los días 2, 9 y 16 de abril.

En el mes de junio, una nueva movilización zonal convocó a, por lo menos, tres escuelas. Las Escuelas Secundarias N° 54 y N° 60 reclamaban por sus condiciones edilicias e inclusive la 54 había sido tomada por la comunidad como forma de protesta.

El 30 de agosto, se realiza un nuevo zonal que sigue convocando escuelas con problemas de infraestructura. De la reunión participaron delegados y docentes de las escuelas Técnica 13,

primaria 103, Media 50 y del Instituto artístico Marechal. Un punto era saliente de la reunión: el 5 de julio se había firmado la emergencia educativa en el Distrito lo que priorizaba obras de infraestructura. Sin embargo, las obras avanzaban lentamente. Sin embargo, la falta de respuestas derivaba en una nueva movilización el 3 de septiembre. De la misma formaron parte más de 60 personas entre docentes, padres de los Barrios Esperanza (Primaria 103/ESB 37), Los Álamos (Anexo ESB 49), Nicol (Técnica 13) de Virrey del Pino, Barrios El Dorado y Talita (Primaria 120/ ESB 182) de González Catán, Rafael Castillo(Primaria 81/ESB 37, Primaria 131/ESB 129), Tablada (ESB 92). Se sumaban nuevas escuelas quienes reclamaban por el estado de sus edificios, pedían la fiscalización de inversiones junto a comedores, netbooks. Los docentes también reclamaban por la recuperación de desfavorabilidades y pago de zona prioritaria en muchas de las escuelas mencionadas. El 9 de septiembre, la ESB 44 encabezaba un relevamiento sobre las condiciones edilicias del nivel en el territorio. Producto de la movilización, días más tarde llegaría una nueva promesa oficial. El día 15 se anunciaba una nueva inversión de \$70 millones de pesos para lo que restaba del año, anuncio a cargo del Inspector de la DGCyE Sr. Roque Betinelli. En teoría, se incluían cuatro “obras” nuevas para las Secundarias Básicas Números: 63 (en EPB 166. De G. Laferrere), 26 (En EPB 67. Virrey del Pino), 197 (ubicada en las Calles Unanue y B Sur Mer 10 en Villa Celina) y media 37 (I. Casanova).

Año 2012

El nuevo año no implicó resolver las demandas de las escuelas movilizadas. Los primeros días de marzo, se registraban acciones por parte de dos escuelas en Virrey del Pino. La escuela 210 y la Técnica 13 del Barrio Nicol reclamaban por infraestructura. Sin embargo, el ciclo más álgido de protesta llegaría de la mano del temporal que afectó a toda la provincia el día 3 de abril. La situación logró articular la lucha de las escuelas junto con la comunidad. Durante todo el mes se produjeron movilizaciones de escuelas y vecinos de los barrios de Villa Unión, Primavera, René Salamanca, Villa Graciela, 24 de Febrero, Las Casitas, 17 de octubre, Latinoamérica, Fénix, Villa Scazzo, Emillozi, San Francisco, La Juanita, Porvenir, Pico Lugo, Volver a Empezar, María Elena, la mayoría barrios de Rafael Castillo e Isidro Casanova.

En el mes de junio, se agregó al listado de escuelas la emblemática Técnica 1 de Isidro Casanova. Buscaba fiscalizar las condiciones de enseñanza y los comedores escolares. Los alumnos se movilaron para intentar obtener respuesta a la situación edilicia de la escuela.

En el mes de julio, una vez más, se realizó un reclamo en el distrito por la declaración de la emergencia educativa en el distrito debido a las obras inconclusas. También se reclamó por la

falta de infraestructura: manifestaron necesitar más escuelas (jardines y secundarias centralmente que continuaban funcionando en cualquier dependencia de forma descentralizada).

A fines de diciembre, y en el marco de una nueva movilización a la DGCyE en La Plata se reclamó por el recorte a los comedores escolares, se pidió por becas para la escuela secundaria y técnica, en particular. En materia de infraestructura, se exigiría no solo mayor presupuesto para Infraestructura sino también para la construcción de escuelas.

Año 2013

El mes de julio, una nueva movilización encontró a las familias reclamando en la ciudad de La Plata por nueva infraestructura. En esa oportunidad, en asambleas, grupos de padres de las escuelas Secundaria N° 91 de Virrey del Pino, la Escuela Secundaria 32 (en la Escuela Primaria n° 81) de Rafael Castillo y la Escuela Secundaria n° 120 de Villa Constructora de San Justo se movilizaron el día 11 de julio.

En el mes de agosto, se sumaban las denuncias por obras inconclusas de las escuelas secundarias N° 91. El 28 de ese mes realizaban una nueva acción la escuela secundaria N° 109 que residía en la primaria 43 de La Tablada, la Escuela Secundaria N° 91 en el primaria 210 del Barrio Los Álamos en Virrey del Pino, la Escuela Secundaria N° 64, acción que era acompañada por la Concentración Educativa Rural del Barrio Rural San Mariano de Virrey del Pino. Un mes más tarde, en septiembre, el sindicato continuaba reclamando por obras a la DGCyE de La Plata y a la distrital.

Año 2014

El reclamo por infraestructura coincidió con una de las huelgas docentes más extensas que se produjo en la provincia durante el período bajo estudio. Al inicio de la huelga y a lo largo de ella, el Sindicato se encargó de enumerar los diversos problemas de infraestructura que golpeaban al distrito. Si bien a lo largo de las distintas asambleas fueron apareciendo los reclamos, una conferencia de prensa realizada el día 14 de abril sintetizó brutalmente el cuadro:

“Más de 300 expedientes con pedidos de reparaciones de escuelas están paralizados hace meses entre la Dirección local y provincial de infraestructura sin perspectiva alguna de resolución, dado que no hay financiamiento previsto para las mismas. La demora en encarar las reparaciones, transforman los deterioros

menores, en daños mayores, con el consiguiente aumento del peligro para las personas, y del daño edilicio cada vez más costoso de reparar.

De las mesas y sillas faltantes para 500 aulas que fueran solicitadas por el distrito a la provincia para este año, sólo fueron recibidas 50. Hay cientos de estudiantes en escuelas secundarias que se están sentando en el piso, de a tres o están rotando ante la falta de mobiliario. En muchas escuelas primarias, los alumnos se sientan en sillas sin respaldo, o con caños rotos que son un peligro para la integridad física. Los funcionarios provinciales no informan fecha ni probabilidades de entrega del mobiliario. Tampoco hay plan b, ni aportes ante la emergencia, del gobierno nacional. Ninguna de las 62 aulas y dependencias que iban a construirse como resultado del convenio entre Dirección General de Cultura y Educación y el Municipio de La Matanza, ha comenzado a realizarse. Las distintas etapas de diseño, planificación, licitación y adjudicación, son los argumentos para las demoras. Es evidente que los tiempos de los funcionarios no tienen relación alguna con las necesidades de los alumnos, los docentes y los padres, que necesitan esas aulas para que funcionen grados y cursos que hoy no tienen espacio físico donde hacerlo.

Las obras por el edificio propio del Instituto Superior de Formación Docente N° 82, y el nuevo edificio de la Escuela de Arte Leopoldo Marechal, tampoco han sido iniciadas.

No se han iniciado las obras en ninguna de las 4 escuelas cuyas construcciones llevaban paradas años y que fueron nuevamente licitadas. Diversas instancias burocráticas demoran estas obras que son de necesidad imperiosa para la comunidad educativa.

Esto se suma al déficit estructural del distrito de más de 100 jardines de infantes faltantes, una decena de escuelas primarias en los nuevos barrios del tercer cordón, y los cientos de edificios de escuelas secundarias que funcionan en escuelas primarias, o sea sin edificios propios.

La provisión de gas en las escuelas que no acceden a la red, y el transporte escolar en las escuelas especiales, no tienen regularidad, con interrupciones abruptas y la necesidad de permanentes gestiones para acceder a servicios que deberían estar garantizados sistemáticamente.”

Frente a la falta de respuestas, el 21 y el 25 de ese mes, distintas escuelas realizaron una masiva movilización a la dirección de infraestructura local. Recién en junio se convocó a licitación para la compra de 3.032 mesas y sillas.

En el mes de julio, una vez más, el sindicato exigía por la resolución inmediata de las obras de infraestructura, reparaciones, aulas y mobiliario necesario para las escuelas matanceras. Agregaba además otros problemas vinculados con la falta de mantenimiento y para garantizar la salud de alumnos y docentes reclamaban también “Que el gobierno garantice la provisión de agua potable y el desagote de pozos en tiempo y forma, y respete todas las normas de Salud que impone la Ley Provincial de Salud e Higiene”. Como forma de visibilización del conflicto, el sindicato resolvía organizar la muestra itinerante de fotografías, denuncias y testimonios, "Emergencia educativa en La Matanza, así están nuestras escuelas", en distintos puntos del distrito. Las mismas demandas, agregando más cupos por comedor, fueron incorporadas en el mes de agosto.

Año 2015

A principio de ese año, el Sindicato Docente presentaba un relevamiento con la cantidad de escuelas necesarias para sostener la obligatoriedad independizando las escuelas secundarias de las primarias. En esos primeros meses del año, varias de las escuelas fueron tomadas por los padres como forma de lucha por la infraestructura. Tenemos registro de por lo menos dos escuelas que fueron tomadas por las familias y una de ellas fue muy extensa. En primer lugar, la Secundaria 73 (kilómetro 41 de Virrey del Pino) fue tomada por más de 30 madres durante más de un mes. El segundo se trató de la Escuela Primaria 115. Sobre todo en este último caso, los padres relataban las exposiciones tóxicas a las que eran sometidos los alumnos dada la crisis de infraestructura en la Región.

b) La Plata

Año 2011

En La Plata, los conflictos por la infraestructura escolar también se colocaron a la orden del día. Desde el mes de mayo, la Escuela Secundaria N° 71 se encontraba reclamando la construcción de un nuevo edificio. Producto de la movilización de la comunidad educativa, las autoridades prometieron en el mes de agosto el inicio de la construcción de la escuela, pero en octubre aún se aguardaba por el inicio de obras. Lograron visibilizar el conflicto gracias, entre otras cosas, a la realización del acto escolar del 25 de mayo en la calle.

Una situación similar era la de la Escuela Secundaria N° 7 de Arturo Seguí. Desde el 2008 reclamaba por la construcción de un edificio nuevo que permitiera albergar a los más de 400 alumnos de la institución. Por falta de espacio, los docentes dictaban clases en el pasillo tal como denunciaron los docentes cuando, junto a padres y estudiantes, decidieron movilizarse en la calle. La escuela protagonizó toda una serie de protestas durante ese año para intentar una solución.

También durante ese año, las escuelas denunciaban que las escuelas eran un objetivo crónico del vandalismo. Entre otras, durante 2011 se movilizaron las Escuela N° 62, la Secundaria N° 14, la Especial N° 529 (173 entre 521 y 522); Primaria N° 116, Media N° 59 y de Adultos N° 724 (146 y 59); Jardín de Infantes N° 906 (63 entre 21 y 22) y Jardín N° 904 (78 y 185). El vandalismo fue un problema que signó tanto el año 2011 como anteriores y posteriores. Solo en el 2011 se registraban por lo menos 36 escuelas vandalizadas. Aquí solo señalaremos que los hechos, que requieren un estudio específico, ponen de relieve una ruptura del vínculo entre las escuelas atacadas y la comunidad escolar.

En otro orden de problemáticas, durante el 2011, emergieron una cantidad de casos de violencia escolar y solo la mitad de las escuelas secundarias contaban con equipos de orientación (gabinetes) según los datos oficiales.

Año 2012

Durante el año 2012, en el mes de enero, el Consejo Escolar platense advertía que destinaría 500.000\$ a afrontar reparaciones ocasionadas por ataques vandálicos a escuelas pero que la cifra era insuficiente.¹⁷ Por eso, el Consejo Escolar presentó el dato comparativo para medir el daño. A decir suyo, con esa suma “se hubiesen podido comprar y colocar 716 estufas, o bien se habría podido equipar a 136 colegios con equipos de audio y video, así como reparar y acondicionar 107 baños”. El informe se publicó a propósito de un acto vandálico en tres escuelas: las Primarias N° 11 y 50 y en el Jardín N° 909.

A fines de febrero, se reconocía que el deterioro de los edificios escolares era una de las principales causas de pérdida de días de clase. Como forma descentralizada de colaboración y control, la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Plata se ocuparía de relevar el estado edilicio de los 1.837 predios escolares bonaerenses, donde se alojan más de 3.000 establecimientos educativos. Tal como señalaban: "uno de los objetivos principales de este censo es estimar con mayor rigor la necesidad de obra nueva y su localización, así como detectar los espacios disponibles para ampliar la obra existente. En función de atender los requerimientos de la extensión de la escolaridad obligatoria, se tendrán en cuenta las condiciones de seguridad, de accesibilidad, de circulación, ventilación y acondicionamiento térmico."¹⁸

Uno de los conflictos por infraestructura más largos de la etapa se iniciaría en la Escuela de Danzas tradicionales cita en calle 7 y Plaza Rocha. El 4 de abril la escuela fue clausurada por la Dirección de Educación dados los problemas edilicios del establecimiento. La escuela de estética que funcionaba en el mismo predio había sufrido desprendimiento del cielorraso durante el horario escolar.¹⁹

A su vez, el temporal de abril de 2012, expondrá la situación precaria de las escuelas: 100 establecimientos debían ser atendidos por los Consejos Escolares para ser puestos en uso, 40 más solo habían sufrido daños relativamente menores y otros 40 requerían intervención provincial para su restablecimiento cuyos arreglos demandarían más de un mes.²⁰ En el largo

17El día, 19/1/2012.

18El día 27/2/2012.

19El día 4/4/2012, 13/4/2012.

20El día 9/4/2012.

conflicto, alumnos, docentes y padres, organizaron permanencias, actividades artísticas, clases públicas, asambleas. En el contexto de movilización de la escuela, se conocieron los datos de la Agencia de Recaudación platense sobre infraestructura escolar: así detectó que de los 74 centros educativos relevados y en regla, 14 tienen problemas de seguridad edilicia en su interior.

Entre las irregularidades más recurrentes se pudo observar la falta de mantenimiento de matafuegos; sistema de la alarma que detecta incendios; ausencia de plan de evacuación; puertas de emergencia bloqueadas, falta de señalización adecuada; desarreglos en la instalación eléctrica y de gas, y otros detalles de infraestructura edilicia.²¹ Frente a la falta de respuestas, los alumnos decidieron tomar el edificio de la escuela en el mes de junio. Al mes siguiente, la escuela de Teatro se plegó a la protesta y procedió a la toma del edificio escolar. En el mes de mayo, la Escuela Media N° 9 de Olmos realizó una sentada como forma de protesta a la ausencia de un plan de obras prometido en 2010 para resolver una situación estructural: más de 700 alumnos distribuidos en tres turnos compartían el único baño con el que contaba la escuela.²²

En el mes de junio, varias escuelas, entre las que se encontraba la Escuela N° 15, iniciaron protestas y sentadas por la falta de calefacción en sus edificios.²³ En el transcurso del mes, además, organizaron una movilización a la sede de educación de la provincia para reclamar la finalización de las obras en sus colegios, el cumplimiento del plan Conectar Igualdad y por buffets con precios accesibles, entre otros puntos.

En el mes de julio, la Escuela Secundaria N° 63 de 522 y 118, de Tolosa, se movilizó para presionar por que se cumpliera con la creación de un edificio nuevo para esa escuela prometido en el año 2009.²⁴ Previamente habían juntado firmas para presionar a las autoridades.

Año 2013

En el mes de mayo se produjo una fuga en la escuela Normal N° 1 y los alumnos debieron ser evacuados. La falta de gas era una problema crónico de las escuelas platenses.²⁵ En otro trabajo nos hemos referido a ello para el período 2003-2007. No era la única con problemas. Una madre denunciaba que su hija junto a la docente habían sufrido descompensaciones por problemas en las cloacas de la escuela N° 73 a la que concurren, en calle 140 y 44, en San

21El día 5/5/2012.

22El día 5/5/2012.

23El día 13/6/2012.

24El día 1/7/2012.

25Diario Hoy, 22/5/2013.

Carlos. En tanto, en un jardín de Los Hornos, de 140 y 63, tenían problemas con el cielo raso. Un grupo de padres de la Escuela N° 45 se había movilizado reclamando por obras en el edificio. Por su parte, una numerosa cantidad de escuelas denunciaban cursadas en condiciones de hacinamiento. Tal era el caso de la Escuela 59 de villa montoso, la 236 de 7 y 601, la 125 de barrio jardín, donde conviven jardín y secundaria.

Año 2014

En el año 2014, también se sucedieron decenas de conflictos con escuelas que debieron suspender las clases por problemas vinculados con la infraestructura. El SUTEBA La Plata denunciaba que: “en las escuelas faltan aulas, espacio vital para desarrollar el proceso de enseñanza. Faltan sillas y mesas, faltan baños y faltan libros, porque no hay bibliotecas”, afirmó el representante sindical. Y añadió: “también como parte de este ajuste económico que afecta a la educación, faltan cargos docentes de maestros, profesores, preceptores y bibliotecarios”.²⁶

En el mes de mayo, docentes, estudiantes y padres se movizaron y reclamaron por infraestructura, comedores y el pago de sueldos adeudados. La Escuela Tunel era un caso emblemático y en esa movilización el sindicato reclamaba que “cuando consultamos qué empresa era la encargada de refaccionar la tan conocida ‘Escuela Tunel’ ningún funcionario nos pudo contestar, ya que nadie conocía porque directamente no se había desarrollado la licitación correspondiente”.²⁷ Previamente durante ese año se habían producido una decena de robos en las escuelas de la región.

En el mes de junio, varias escuelas se movilizarían ante la falta de calefacción y la suspensión del servicio por parte de la empresa Camuzzi.²⁸

Ese año también se sucedieron una numerosa cantidad de hechos vandálicos que afectaron a numerosas escuelas y también se produjeron movilizaciones por recortes en los cupos de los comedores escolares.

Año 2015

En el 2015, una vez más los Institutos de Formación Docente se encontraron movizados y en la calle. La comunidad educativa se encontraba movizada desde el mes de abril y en junio decidió organizar una marcha reclamando por el edificio que ya había sido prometido en

26Diario Hoy, 25/4/2014.

27Diario Hoy, 22/5/2014.

28Diario Hoy, 14/6/2014.

2011. En el mes de junio, el instituto convergió en una marcha con otras escuelas de la Región, todas reclamando por infraestructura. En efecto, los más de 2.000 estudiantes y docentes afectados lograron articular la movilización sumando distintas escuelas de la región que se solidarizaban con los reclamos del Instituto y agregaban los propios por infraestructura.²⁹ La convergencia de una decena de escuelas se repitió a fines de junio.³⁰ En paralelo, días más tarde, se denunciaría una sub-ejecución del gasto en materia de infraestructura: se estimaba que sobre un total de 31 millones, apenas se habían destinado 1 millón a equipamiento.³¹

En el mes de agosto, el Normal 1 sufrió el desprendimiento del cielorraso de diez aulas luego de una tormenta. La comunidad educativa denunciaba que el estado de abandono del edificio era crónico. Luego de una semana con el mismo problema, un grupo de padres identificaba claramente el problema y declaraban: “en esta reunión queremos que las autoridades nos expliquen porque todavía no comenzaron a refaccionar nada y que nos den un argumento sólido y preciso. Nosotros ya tenemos decidido y lo charlamos con los centros de estudiantes, que si las aulas siguen cerradas y no se arreglan, no vamos a mandar a los chicos al colegio y el resto de la escuela estaría dispuesto a parar también”. Y los detalles seguían con datos de otras escuelas recabados por el SOEME: “tenemos todo documentado con fotografías. Las irregularidades son tremendas. Presencia de alimañas (ratas, ratones, arañas, cucarachas), hongos y humedad en las paredes y techos, goteras, pérdidas de gas en termotanques, calefones y cocinas, pozos ciegos desbordados, cañerías tapadas, aguas servidas (contaminadas con restos fecales y orina) en baños y cocinas, heladeras rotas que provocan que los alimentos pierdan la cadena de frío y hasta el peligro inminente de derrumbe de cielorrasos o paredes, entre otras”. Como si ello fuera poco, agregaban: “hay cables pelados a la vista que son un peligro inminente para los trabajadores y los chicos. Además faltan luminarias, y esto conlleva problemas de inseguridad. A la noche varios de los edificios escolares quedan en la más absoluta obscuridad y en ocasiones sufren actos vandálicos”.

Finalmente, en diciembre de 2015 se evaluaría declarar la emergencia edilicia en toda la provincia. Al inicio de la gestión de Cambiemos, en el 2016, se reconocía que “de los 11.213 edificios escolares de la provincia, el 80 por ciento “tiene problemas de diversa índole” según admitió Alejandro Finocchiaro.³²

29Diario Hoy, 11/6/2015.

30Diario Hoy, 30/6/2015.

31Diario Hoy, 15/7/2015.

32Infocielo, 8/11/2016. Disponible online en:

http://infocielo.com/nota/74679/escuelas_en_emergencia_lanzan_una_web_para_denunciar_problemas_edilicios_y_reclamar_obras/

Conclusiones provisorias

El presente trabajo recoge una primera aproximación al problema de las luchas protagonizadas por la comunidad educativa (docentes, padres, alumnos, auxiliares) por problemas vinculados al presupuesto educativo no vinculado a salario. En una primera aproximación emergen dos problemáticas centrales: infraestructura escolar y comedores. El problema de la infraestructura también apareció con centralidad en los estudios realizados en otras jurisdicciones (valgan los casos de las provincias de Salta, Misiones, Formosa, Chaco, entre otros) y como mostramos se agrava en contextos de aumento de la obligatoriedad escolar.

Tanto en 1994-98 como en 2014 (operativo CENIE 09), la infraestructura de la provincia se encontraba estancada. Peor aún. En contextos de expansión de la matrícula, ya que vimos cómo aumentaba la cantidad de alumnos en primaria y la concentración de alumnos en inicial resultaba importantísima. El problema de la escuela secundaria en la región aparecía asociado a la necesidad de edificios propios. Si bien no nos ocupamos de esto aquí, dejamos sentado que el nivel medio tiene otras formas de desagote: de las escuelas modalidad común a las de adultos y de allí a las formas de terminalidad exprés tipo Fines 2 (De Luca, 2017). Situación análoga para el nivel inicial con los circuitos de gestión comunitaria.

En materia de organización y de lucha de la comunidad por demandas asociadas con infraestructura, vimos cómo, se reclamaba centralmente: aumento del presupuesto, obras, nuevas escuelas y secciones, reparación de las escuelas existentes, escuelas que incluyan áreas de administración (para preceptorías, para personal directivo). Si bien centralmente se demandó por más obras, el mantenimiento y las denuncias de contaminación también ocuparon un lugar central sobre todo para el caso de La Matanza. En paralelo al problema por la infraestructura, emergió un problema asociado más vinculado al problema salarial docente: el pago de desfavorabilidad por escuelas de difícil acceso en el caso matancero y en La Plata ello se manifestó en el reclamo por mayor y mejor calidad edilicia en la discusión paritaria.

En esta primera aproximación pudimos ver que el problema de la infraestructura vertebraba, en general, toda una serie de reclamos de la comunidad escolar. En esa lucha, se pliegan docentes y sus estructuras sindicales (incluyendo agrupamientos docentes, listas y partidos) pero no son los únicos actores del proceso. La comunidad participa, en ocasiones acompañada por delegados, y busca respuestas para un problema real y cotidiano de las escuelas de ambos distritos. En general, se imponen métodos de acción directa y la prensa platense elige hablar

de “piquetes de mochilas”. En efecto, movilizaciones, caravanas, asambleas, tomas de escuela, recolección de firmas, petitorios son algunos de los métodos de lucha utilizados. Queda para un segundo momento de la investigación, el recomponer con mayor minuciosidad las acciones realizadas en cada protesta y, principalmente, los logros obtenidos. En general, en un estudio preliminar para el caso platense para el período 2003-2007 hallamos que la protesta derivaba en mayores partidas presupuestarias para infraestructura ampliándose los créditos del BID y asignándose nuevas partidas.